



[Gibraltar: España asume el control y los costes de la frontera a cambio de renunciar a la soberanía](#)

AEC
05/04/2026

El histórico acuerdo sobre Gibraltar, presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez como un punto de inflexión para la región, es en realidad una renuncia en toda regla a las aspiraciones de soberanía española. A cambio de una fluidez fronteriza que beneficia principalmente a la economía del Peñón, España asume el coste y la responsabilidad de controlar la frontera exterior de la UE, sin obtener ninguna contrapartida tangible en la disputa por la titularidad del territorio. Se vende como un pacto de «prosperidad compartida», pero en la práctica consolida el desequilibrio económico y perpetúa la dependencia del Campo de Gibraltar de una colonia con un régimen fiscal ventajoso.

España asume el control de Schengen a coste cero para Gibraltar

El núcleo del tratado es la demolición de la verja y la integración de Gibraltar en el espacio Schengen. Sin embargo, la letra pequeña revela quién asume la carga. Será España, a través de sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la que gestione los controles de entrada en el puerto y el aeropuerto de la colonia. Se trata de una cesión sin precedentes que el Ejecutivo

intenta maquillar bajo un paraguas temporal de Frontex.

La ficción de Frontex

El acuerdo establece que, durante un periodo de transición de cuatro años, agentes de la agencia europea Frontex acompañarán a la Policía Nacional española en los controles. Esta fórmula es un mero artificio diplomático para que el Reino Unido y Gibraltar puedan negar la evidencia: que la autoridad fronteriza en el Peñón será española. Pasado este plazo, la intención es que los agentes españoles operen en solitario. España asume la responsabilidad de proteger la frontera exterior de Schengen en un territorio cuya soberanía no reconoce, un hecho jurídicamente anómalo.



La dependencia económica

Más de **15.000 trabajadores transfronterizos**, de los cuales unos 10.000 son españoles, cruzan la verja diariamente. El PIB per cápita de Gibraltar supera los 80.000 euros, mientras que el del Campo de Gibraltar apenas alcanza los 18.000 euros. El acuerdo facilita este flujo, pero no ataca la raíz de la desigualdad, consolidando un modelo donde la comarca española actúa

como mera ciudad dormitorio y proveedora de mano de obra barata para la colonia.

La ‘prosperidad compartida’: un espejismo que oculta la competencia desleal

El Gobierno insiste en que el acuerdo generará un motor de desarrollo para la comarca. Se habla de un fondo de cooperación para reducir la brecha de desigualdad, pero se evitan los temas cruciales que lastran la economía española: la competencia fiscal desleal y el contrabando. Gibraltar seguirá siendo un territorio de baja tributación, lo que distorsiona el mercado y fomenta una fuga de actividad comercial desde el lado español.

La Realidad

El Gobierno celebra la eliminación de la verja, pero ignora que la verdadera barrera es la fiscal. Mientras Gibraltar mantenga un Impuesto de Sociedades mínimo y no aplique el IVA, la «prosperidad» seguirá fluyendo de manera unidireccional. El acuerdo apenas contempla medidas cosméticas sobre el tabaco, pero no aborda una armonización fiscal real, lo que supone una victoria para el modelo económico llanito.

«Lo que no puede ser es que el Gobierno de España esté cediendo en todo para que al final la soberanía, que es lo irrenunciable, se quede en un cajón. Es una renuncia histórica a cambio de nada.»

– Fuentes del Partido Popular, citadas en El Debate (Mayo 2024).

Desafíos ignorados: expansión medioambiental y contrabando

El optimismo del Ejecutivo choca con problemas graves que el tratado no solo no resuelve, sino que podría agravar. Uno de los más flagrantes es el impacto medioambiental del proyecto **Eastside**. Gibraltar continúa ganando terreno al mar mediante rellenos que afectan directamente a Zonas Especiales de Conservación (ZEC) españolas, perjudicando a la pesca local sin que el Gobierno haya logrado frenarlo.

Además, la eliminación de controles físicos terrestres, si no va acompañada de una vigilancia fiscal y aduanera férrea, amenaza con disparar el contrabando y otras actividades ilícitas que ya son un grave problema de seguridad en la zona, dominada por el narcotráfico. España asume la seguridad de la frontera Schengen, pero la permeabilidad para las mercancías puede convertirse en un coladero si no se actúa con contundencia.

Un acuerdo de sumisión a cambio de una foto

En definitiva, el Gobierno de Sánchez ha optado por la vía pragmática, priorizando la fluidez económica a corto plazo sobre una reivindicación histórica irrenunciable. España asume los costes y las responsabilidades de un Estado miembro en un territorio que no es suyo, legitima el statu quo colonial y pospone indefinidamente cualquier avance en materia de soberanía. El éxito de este modelo dependerá de la voluntad política para corregir los desequilibrios, pero el punto de partida es una cesión inaceptable que debilita la posición de España a largo plazo.